

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE DIPUTADOS

Núm. 43

SESION DEL 28 DE AGOSTO DE 1863.

PRESIDENCIA DEL Sr. URIBURU.

Concluye la discusion del proyecto de ley sobre Ciudadanía.

Presidente
Albarellos
Alsina
Aguirre
Aujier
Agote
Bedoya
Blanco
Cabral
Cantilo
Civit
Castro
Elizalde
Garcia [D. J. A.]
Gorostiaga [D. L.]
Gorostiaga [D. B.]
Granel
Ibarra
Igarzabal
Lezama
Mármol
Montes de Oca
Moscoso
Moreno
Martinez
Obligado [D. A. C.]
Obligado [D. P.]
Ortiz
Ocampo
Padilla
Pizarro
Quintana [D. M.]
Quintana [D. J.]
Ruiz Moreno
Sarmiento
Torrent
Velez
Villanueva
Zavaleta
Zuviria
Zavalía

CON AVISO.

García (D. P.)
Gutierrez
Ocampo
Rojo

SIN AVISO.

Del Rio

En Buenos Aires, á 28 de Agosto de 1863, reunidos en su sala de sesiones los Señores Diputados [al márjen] el Sr. Presidente proclamó abierta la sesion. Leida, aprobaba y firmada el ácta de la anterior se anunció que la Comision de Lejislacion se habia espedido en el proyecto que ordena el pago de una cantidad al almirantazgo ingles por el reconocimiento del canal de Martin Garcia. Se mandó imprimir y repartir. Se anunció tambien el despacho de la Comision de Peticiones en la solicitud del Sr. Padilla, acordándole la licencia.

Sr. Presidente—Si la Cámara lo tiene á bien, puede considerarse sobre tablas, la licencia que solicita el Sr. Diputado Padilla. [Apoyado.]

[Se leyó el dictámen de la Comision de Peticiones.]

Sr. Alsina—¿No hay informe?

Sr. Cabral—Informaré si el Sr. Diputado se empeña.

Sr. Alsina—Yo quisiera oir

las razones que ha tenido la Comision para aconsejar que se conceda esta licencia.

Sr. Cabral—El Sr. Diputado por Tucuman, Sr. Padilla, ha manifestado en el seno de la Comision, que asuntos particulares de familia, le inducian á solicitar esta licencia; y la Comision creyó muy atendibles los motivos espuestos por el Sr. Diputado, mucho mas cuando las Cámaras tienen número suficiente para poder funcionar con bastante desahogo.

Estas han sido las razones que ha tenido la Comision para aconsejar el adjunto proyecto de resolucion concediendo esa licencia. Es cuanto por ahora cumple informar.

Sr. Presidente—Se vá á votar si se aprueba en jeneral el del dictámen de la Comision de Peticiones.

[Se votó y resultó afirmativa contra tres. En seguida se votó el proyecto en particular, y fué aprobado por igual número de votos.]

Sr. Presidente—La Cámara de Senadores ha autorizado al Presidente de ella para que se entienda con el de esta Cámara para arreglar la manera de tener sesiones diarias. La idea de del Presidente de la Cámara de Senadores, consiste en que aquella Cámara tenga sesiones hasta las dos de la tarde, á fin de que esta pueda tenerlas desde esa hora en adelante.

Sr. Moreno—Yo creo que no queda tiempo bastante desde las dos de la tarde en adelante,

porque es muy avanzada la hora.

Sr. Zavalía—Si el Sr. Diputado se fija en la hora á que entramos, verá que no es tarde.

Sr. Cantilo—Yo no me esplico los motivos que han inducido al Senado á adoptar esta resolucio, pero creo que en la práctica no tendrá los resultados que espera. Es difícil que el Senado termine sus sesiones á la hora que indica, y será frecuente lo contrario; resultando de ahí, que los diputados aguarden el momento de entrar en sesion y que este llegue tarde para poder esta Cámara ocuparse con tiempo suficiente de sus asuntos. Es preciso, Sr. Presidente, que evitemos un mal que puede tener lugar, esto es, que se sancionen leyes de prisa á causa de falta de tiempo para estudiarlas y luego para discutir las; leyes que prueben que la Cámara marcha lijero pero no que marcha segura. Por estas consideraciones es que no adhiero á lo que se propone.

Sr. Elizalde—Yo creo que se satisface el objeto de despachar todos los asuntos con la indicacion que ha hecho el Sr. Presidente. Actualmente se cita á la una, y se empieza el trabajo á las dos. Por consiguiente, teniendo sesiones diarias á las dos, es claro que se ha de trabajar mucho mas.

Sr. Cantilo—Le observaré tambien al Sr. Diputado, que si fuéramos á tener sesiones diarias, no habrá tiempo para que las Comisiones se espidan.

Sr. Elizalde—Fíjese el Sr. Diputado en que no queda mas que un mes.

Sr. Cantilo—Yo no le veo término á ningún periodo lejislativo, sino aquel que las sesiones tengan.

Sr. Zavalía—Las observaciones del Sr. Diputado son en contra de las sesiones diarias, aun que el Congreso tuviera casa en que funcionar diariamente.

Sr. Presidente—Puede resolver la Cámara por una votacion si se acepta la proposicion hecha de acuerdo con lo que ha comunicado el Presidente del Senado.

Sr. Moreno—Yo creo que sería mejor autorizar al Sr. Presidente para ponerse de acuerdo ó arreglar este asunto con el Sr. Presidente del Senado, porque tal vez pueda encontrarse otro mejor.

Sr. Ruiz Moreno—Lo que la Cámara debe resolver, es si ha de tener sesiones diarias ó no, porque se trata de alterar un artículo del Reglamento. Por consiguiente, yo creo que no se pue-

de autorizar al Presidente para variar los dias de sesiones, y yo he de votar en contra, porque creo que es completamente inútil; ereo que reuniéndonos á las once de la mañana y teniendo sesion hasta las cinco tarde, se conseguirá el objeto que nos proponemos.

Sr. Elizalde—Es muy fatigoso.

Sr. Moreno—Asi tendremos un dia para estudiar.

Sr. Presidente—Se va á votar si la citacion se ha de ser á las dos de la tarde diariamente.

[Se votó y resultó afirmativa de 19 votos contra 12. En seguida se dió cuenta de un proyecto presentado por el Sr. Diputado Agote sobre la apertura de un camino de la ciudad de Santiago á la de Catamarca.]

Sr. Agote—El proyecto que tenemos el honor de someter á la consideracion de la Honorable Cámara, es de interes jeneral para la República. Por él se trata de allanar el único obstáculo que se opone al tráfico directo entre las provincias de Tucuman y Catamarca, y es tambien el único obstáculo formal para completar en la República el estudio científico del sistema de viabilidad, cuyo estudio científico promueve actualmente el Gobierno Nacional. Allanado este obstáculo natural, las provincias del Norte se comunicarán por medio de esta via carrétera: por ejemplo la provincia de Tucuman con Mendoza sin necesidad de dar el inmenso rodeo que ofrece la via de Santiago.

Como se vé, Sr. Presidente, el proyecto es de conveniencia jeneral, y favorece particularmente á las provincias mas centrales, que por su situacion y la naturaleza de sus productos, reclaman urjentemente la mejora de estos caminos. Este proyecto no es nuevo. El año 1860, los Gobiernos de Tucuman y Catamarca, presidido entonces por el actual Vice Presidente de la República, comprendiendo la importancia de esta obra, mandaron practicar el reconocimiento del cerro, para saber si era practicable esta via carreterra. Tuvo algunas dificultades el ingeniero que debia practicar esta operacion; pero al fin, el Gobierno de Catamarca nombró un ingeniero civil, quien despues de algunos estudios declaró que la via era practicable, y levantaron el plano con el presupuesto de la obra. El Gobierno de Catamarca pagó por este trabajo 1.500 \$, y este es el estado en que se encuentra este trabajo en la actualidad.

Creo inútil entrar á demostrar la grande influencia que ejercen las vias de comunicacion en el

progreso y en el engrandecimiento de los pueblos. El Gobierno Nacional ha dado repetidas pruebas de haber dedicado especialmente su atencion á este ramo del servicio público, subvencionando algunas empresas y mejorando en cuanto ha sido posible todas las vias de comunicacion de la República. Me limito, pues, á las ligeras observaciones que acabo de hacer, porque creo que son bastantes para que la Cámara forme su juicio respecto de este proyecto. [Apoyado.]

Sr. Moscoso—He sido informado que los artículos que presenta la Comision del proyecto que vamos á discutir, han sido introducidos de acuerdo con el Sr. Ministro del Interior. Por esta razon, yo creo que debe invitarse al Sr. Ministro para que tome parte en esta discusion, puesto que la Cámara no habria adelantado nada en dar una ley que pueda ser vetada.

Sr. Cantilo—Yo creo que es innecesaria la presencia del Sr. Ministro del Interior, porque el Sr. Ministro sabe ya cual es el asunto de que va á tratarse. Por consiguiente, creo que la postergacion de esta discusion, nos haria perder un tiempo que podemos ya consagrarlo á ella.

Sr. Presidente—Sin embargo, el reglamento autoriza á cada uno de los señores Diputados para solicitar la presencia del Sr. Ministro.

Sr. Alsina—Se acostumbra llamar al Sr. Ministro cuando no se sabe cual es su opinion, pero no cuando se sabe ya como piensa.

Sr. Montes de Oca—Yo no creo que sea indispensable la presencia del Ministro en esta ocasion; pero creo que el Sr. Diputado tiene razon para llamarlo, para que manifieste los motivos en que funda su opinion.

Sr. Garcia [D. P.]—La práctica es, que cuando se pide la asistencia del Sr. Ministro por algun Sr. Diputado, es porque el Sr. Diputado que la ha pedido trata de pedir esplicaciones. El Sr. Diputado no ha dicho que va á pedir esplicaciones, ha pedido la asistencia del Sr. Ministro para que esté aqui.

Sr. Moscoso—Yo he manifestado claramente que deseo que la Cámara no pierda su tiempo en dar una ley que puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.

Sr. Garcia [D. P.]—Cuando el Poder Ejecutivo tiene una opinion fija sobre la materia, no creo que sea necesaria la presencia del Ministro. En cuanto á que el Poder Ejecutivo pueda vetar esta ley, yo creo que esa es una cosa muy grave, y que el Poder Ejecutivo no lo hace sino en casos

estremos. El Sr. Ministro conoce el asunto que está á la órden del dia, y si no asiste á la discusion, es porque no considera el punto tan grave.

Sr. Montes de Oca—¿Es materia leve?

Sr. Garcia [D. P.]—No es leve, pero no dará lugar á vetar la ley.

Sr. Presidente—Invito á la Cámara á pasar á cuarto intermedio mientras se llama al Sr. Ministro; si el Sr. Ministro tiene algun obstáculo para venir, entonces continuaremos la sesion sin su presencia.

Sr. Goroitiaga [D. B.]—Hago mocion para que aprovechemos el tiempo en discutir la enmienda que ha introducido el Senado en el proyecto sobre pesos y medidas. [Apoyado.]

Sr. Presidente—Habiendo sido apoyada suficientemente la indicacion, creo que es inútil ponerla á votacion. [Apoyado.]

Se leyó el dictámen de la Comision sobre las enmiendas introducidas por el Senado.

Sr. Zavaleta—La enmienda introducida por el Senado, importa á mi juicio, la introduccion de un sistema transitorio de pesos y medidas, entre los que existen y se tratan de establecer. Estas enmiendas pueden considerarse bajo dos aspectos: primero del de la dificultad que tenga el Congreso para hacer la ley desde hoy, y segundo bajo el punto de vista de las conveniencias.

Respecto del primer punto, diré que por las enmiendas introducidas por el Senado, no se propone la adopcion de un sistema de pesos y medidas determinado, porque no dice absolutamente bajo qué bases se ha de hacer la uniformidad de pesos y medidas. Si bien el Congreso tiene el derecho de dar una ley uniformando los pesos y medidas en toda la República, á mi juicio, debe establecerse un sistema por medio del cual se consiga la uniformidad, porque de lo contrario el Congreso abdicaria de sus atribuciones.

Respecto del segundo punto, el de la conveniencia, creo que no la hay absolutamente; creo que estas enmiendas, lejos de favorecer la introduccion del sistema métrico decimal, no vienen sino á retardarlo, tal vez á hacerlo imposible. Yo creo que el Poder Ejecutivo en el caso de querer uniformar los pesos y medidas, no ha de querer emprender dos obras á la vez, sino que tratará primeramente de reformar los pesos y medidas bajo otro sistema diferente del sistema decimal. Por consiguiente no se ocupará en adelantar la introduccion del sistema decimal, porque vencida la dificultad de vencer el primer sistema, ya

seria difícil que se acometiera la otra empresa. Por un artículo de la ley que se ha sancionado, se prove á esta necesidad, puesto que obliga al Poder Ejecutivo á hacer levantar cuadros de equivalencias, entre las medidas del sistema métrico decimal y las que actualmente se usan en la República. Por consiguiente, me parece que con esto se consigue el objeto que se ha propuesto el Senado. Asi es que pido á la Cámara que no acepte las enmiendas introducidas.

Sr. Zuñiría—Sin haber estudiado esta cuestion detenidamente, yo creo que tiene razon el Senado en las enmiendas que ha propuesto. Yo no creo, como el Sr. Diputado que deja la palabra, que esto sea retardar mas la introduccion del sistema métrico. Es sabido que todas las medidas que existen en la República no son iguales, y por consiguiente para ponerlas en relacion exacta con el sistema métrico decimal, es preciso que haya uniformidad en las que ya existen. Yo creo, pues, que para facilitar mas el sistema métrico, es necesario uniformar primeramente el sistema que ya existe. ¿Cómo van á saber nuestros aldeanos lo que es un metro, si no saben lo que es vara, lo que es almud, lo que es fanega? Para que puedan comprender lo que es el sistema métrico, segun sus relaciones con el sistema actual, es necesario preparar el camino por aquellos medios conocidos, es decir, uniformando primeramente las medidas que ya existen. Por esta razon, yo creo que es conveniente la idea del Senado.

Sr. Zavaleta—Yo creo que la argumentacion del Sr. Diputado que deja la palabra, se reduce á lo siguiente:—El Sr. Diputado cree que conviene introducir en la República el sistema métrico decimal con el objeto de uniformar los pesos y medidas; pero al mismo tiempo que se va á hacer eso, cree que conviene uniformar el sistema que existe. Parece que el Sr. Diputado creyera que uniformar el sistema actual es una cosa muy sencilla; que diciéndole al Poder Ejecutivo, que se le autoriza para uniformar los actuales pesos y medidas, el Poder Ejecutivo puede hacerlo muy pronto y muy fácilmente; pero yo creo que la uniformidad de este sistema encontraria tantas dificultades como para la introduccion del sistema métrico.

Todo el mundo sabe que son diferentes las medidas que existen en la República, y que pocas conservan la misma denominacion; pero asi que se conozca bien las relaciones que hay entre unas y otras, será mas fácil la uniformidad. Parece,

pues, que no tiene ninguna importancia la prévia igualacion de todas las medidas existentes, para conseguir el objeto que nos proponemos.

Yo creo, pues, que este sistema transitorio que se propone, ha de encontrar tantos obstáculos como el mismo sistema métrico decimal. Le observaré tambien al Sr. Diputado, que puesto que acepta la conveniencia de introducir el sistema métrico decimal, no debe oponer ningun obstáculo para que se consiga, y digo esto, porque uniformar los pesos y medidas bajo cualquiera base, viene á hacer desaparecer en gran parte la necesidad que hay de adoptar el sistema métrico. En ese concepto, yo creo que la introduccion de ese sistema que se propone, es contrario á la adopcion del sistema métrico decimal.

Debo tambien hacerle presente al Sr. Diputado, que en los paises donde se ha querido hacer lo mismo que lo que ahora se pretende, lejos de ser una ventaja, es un obstáculo. En la Francia misma, se creyó mas fácil la adopcion del sistema decimal, adoptando medidas transitorias como esta, y no se hizo sino retardar mas su adopcion. Asi es que la Francia, que pudo haber adoptado este sistema desde el año 20, no pudo hacerlo hasta el año 50, á causa de las medidas parciales que se dieron. Por consiguiente, yo creo que no debe adoptarse esa enmienda.

Sr. Montes de Oca—Seria conveniente que se leyera el proyecto, porque yo no lo conozco.

Sr. Gorostiaga—Estaba repartido hace muchos dias.

Sr. Montes de Oca—Puedo asegurarle al Sr. Diputado que yo no lo he tenido.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Como es un asunto que estaba á la órden del dia, yo he pedido que se discutiera.

[Se leyó el dictámen de la Comision, rechazando la enmienda introducida por el Senado, que se votó y fué aprobado por afirmativa de 25 votos contra 9.]

Sr. Presidente—Ha sido rechazada la enmienda. Invito á la Cámara á pasar á un cuarto intermedio.

Vueltos á la sala los señores Diputados, continuó la discusion del proyecto sobre ciudadanía.

Sr. Presidente—Invito al Sr. Diputado Alsina á que reproduzca la mocion que hizo en la sesion anterior, con motivo de la cual se suspendió la sesion.

Sr. Alsina—La mocion que yo hice, fué simplemente para que entraran en discusion los artí-

culos sobre la suspension y la pérdida de los derechos de ciudadanía, que la Comision de Negocios Constitucionales habia suprimido. Esta fué mi mocion; no repetiré nada de lo que dije en la sesion anterior, porque la única razon que dió el señor miembro informante para no ocuparse de este asunto, fué que no estaba preparado para entrar á discutirlo. Creo que desde antes de ayer hasta hoy, ha tenido tiempo bastante para formar su opinion, y en ese caso yo soy el que debo esperar á que se me conteste.

Sr. Zuñiga—Al informar sobre este proyecto, manifesté que la razon principal que tuvo la Comision para no ocuparse de este asunto, fué la de que no creia que venian bien estos artículos en la ley de ciudadanía. Esta fué la razon principal que se dió, y despues se dijo que no habia la preparacion necesaria para considerarse estos artículos en aquella misma sesion, lo que tampoco era posible por la hora avanzada.

Sr. Torrent—Cuando en el seno de la Comision se estudiaba el proyecto de ley de ciudadanía y naturalizacion, llegando á estos artículos y estudiándolos con la debida detencion, se insinuó la idea de que acaso se habrian incluido estos artículos en el proyecto primitivo, siguiendo el ejemplo de casi todas las leyes de ciudadanía dictadas hasta el presente, y conocidas por nosotros; pero consagrándoles una reflexion detenida hemos visto que no resistian al exámen de la razon. Primeramente hablan de la suspension de la ciudadanía, y despues de la pérdida. Principiemos por lo segundo, [Leyó.] La Comision encontró, que dada la base de la ciudadanía natural forzosa, obligatoria y orijinada de la naturaleza misma no habia poder bastante para arrancársela á aquel á quien la naturaleza lo dotó con ella. Si los derechos del ciudadano emanan de la naturaleza, el hombre no puede quitárselos; si hay perfecta similitud entre las obligaciones y los derechos que nacen de la naturaleza misma entre la madre y el hijo y entre la patria y los ciudadanos, asi como no es posible en ningun caso arrancar al hijo la calidad de hijo de los que le dieron el ser, asi tampoco puede arrancársele al ciudadano la calidad de tal en el pais que la naturaleza le designó por patria. Solamente sentando este principio así, podemos decir que se impone la ciudadanía natural, porque nos la impone la naturaleza. Si esto es inalienable é indestructible, porque no es el hombre sino Dios el que ha establecido esto. No pueden pues, aceptarse los casos, por los cuales segun el proyec-

to puede perderse el derecho de la ciudadanía.

Si la ciudadanía natural es obligatoria, si es forzosa, no puede perderse por la simple renuncia del ciudadano; porque la circunstancia de aceptar la ciudadanía en un pais extranjero, no estingue la ciudadanía nativa, la ciudadanía orijinaria. Pueden ejercer esta ciudadanía en virtud de la libertad y únicamente porque las leyes del pais donde nacen estos individuos, no alcanzan ni pueden hacerse cumplir en el pais extranjero donde van á residir. Asi es que solo en este caso, puede renunciar impunemente el ciudadano el ejercicio de la ciudadanía natural: pero como se vé, señor, esto no es mas que efecto de la fuerza de las cosas. Asi es que por el hecho de la aceptacion de un empleo de un gobierno extranjero, sin previo permiso del Congreso, se comete un delito que la ley puede castigar segun su gravedad; pero en manera alguna puede imponerle la pérdida de la ciudadanía, de una ciudadanía que la ley no se la ha dado, sino la naturaleza. Tampoco la ley puede quitarle este titulo por sentencia condenatoria que merezca pena infamante, apesar de que esta es la causa mas grave y dolorosa. Esta es, señor, la condenacion de aquel individuo que haya tenido la desgracia de mancharse con crímenes grandes, de aquel que no tuvo la virtud de no cometer un delito que merezca sentencia condenatoria, pero que sigue perteneciendo al número de ciudadanos. Como ha de ser, señor, Dios constituyó la sociedad asi; buena ó mala, ella se compone de buenos y perversos; pero de toda ella forma un todo que nosotros no podemos reformar, porque es la obra de la naturaleza: y asi, señor, como levantamos la frente para celebrar el nombre glorioso de un ciudadano ilustre, y nos envanecemos de que haya nacido en nuestro suelo, asi tambien tenemos que bajar la frente con rubor cuando un hermano nuestro se inclina á la via del mal y del crimen. Pero de todo esto, no surge el derecho de borrar de la frente de un individuo el distintivo de ciudadano que trae desde el seno de Dios.

Creo, pues, señor, que la ciudadanía natural no se puede perder; que la Constitucion, que es la ley fundamental que la ha consagrado, no dice en ningun caso que ella pueda perderse. Si las leyes de la naturaleza no fuesen bastantes, tenemos ademas la ley fundamental de la República que reconoce y consagra el derecho de ciudadano sin que en ningun caso pueda perderse.

El proyecto primitivo dice que se suspenden los derechos de ciudadanía, primero, por estado

de quiebra que haya sido calificado de fraudulenta; y segundo, por demencia, por enjuiciamiento criminal y por no inscripcion en la Guardia Nacional.

Señor: si la ciudadanía es una calidad inherente al individuo, si esta calidad le pertenece y va unida á él, como va la calidad de hijo, como se une el hijo á la madre, si nosotros no podemos separarlos por medios artificiales, yo no concibo tampoco como podemos suspenderla, porque la suspension no es sino la pérdida temporal. No, señor: el primer derecho anexo, ó que se cuenta entre los derechos anexos á la ciudadanía es el derecho de ser ciudadano. Todo individuo, pues, tiene derecho á ser ciudadano, y este derecho también vendríamos á suspenderlo, si aceptamos estas condiciones por las cuales los derechos de la ciudadanía se suspenden.

Si se encuentran suficientes las razones que he tenido el honor de manifestar antes de ahora y en esta vez, se verá que el Congreso se halla desposeído de toda facultad para quitar el derecho de ser ciudadano. Entonces nos quedaria solamente la cuestion de si pueden suspenderse ó no algunos derechos particulares inherentes á la ciudadanía. Eso es ya diferente. Puede hallarse un ciudadano inhabilitado para ejercer algunos derechos de la ciudadanía. Si esta es la cuestion que se trae al debate, ya cambia de faz, porque entonces trataremos simplemente de la conveniencia de inhibir al ciudadano de tales ó cuales derechos en casos determinados. Primero por el estado de quiebra, desde el momento en que ella se ha calificado de fraudulenta. Este es en efecto, señor, un delito, el quebrar fraudulentamente es un robo, mas grave todavia que el robo comun. Toda vez que un ciudadano arjentino comete un delito así debe ser castigado ¿pero puede ser suspendido en el ejercicio del conjunto de sus derechos de ciudadanía? Yo creo que no, por las razones que he manifestado antes, y las que me reservo para sostener esto mismo despues. En todo caso, esta seria una cuestion propia del código penal; allí, al tratarse de esta clase de delinquentes, puede estudiarse con mayor detencion si conviene ó no aumentar á las penas especiales con que se castigan estos delitos, otra pena mayor que todas las otras quizá, consistente en la suspension de todos los derechos de ciudadano.

El otro caso porque se suspenden los derechos de ciudadanía, es por demencia. Señor, esto es castigar realmente la desgracia. ¿Quién nos ha

dicho, en qué ejemplo, en qué ley de la naturaleza podemos apoyarnos para decir que los ciudadanos desgraciados no son ciudadanos? ¿No son ciudadanos por que son desgraciados! ¿En qué podríamos apoyarnos, señor, para establecer que aquel infeliz que alcanza este estado deplorable de la vida, por el solo hecho de estar consumada su desdicha, quedan suspendidos sus derechos de ciudadanos? ¿El demente, no es ciudadano? ¿Cómo no, señor, si es arjentino, y un arjentino que merece toda nuestra consideracion, un arjentinó á quien lejos de castigar debemos proteger lejos de quitarle los derechos de ciudadano, debemos procurar remediar su desgracia? ¿Podria ser razon bastante la demencia de un individuo, por ejemplo, para que un ciudadano arjentino demente, no pueda ser protegido en un pais extranjero, si allí fuese violentado en sus derechos? Yo creo que esto no resiste al menor exámen de la razon.

El enjuiciamiento criminal, es otra causa por la cual pueden suspenderse los derechos de la ciudadanía. Esto para mí, tiene un defecto capital. ¿Bastará el enjuiciamiento criminal, bastará la simple acusacion para que un ciudadano pueda ser suspendido del ejercicio de los derechos de ciudadano? Podria suponerse la declaracion de haber lugar á la formacion de causa. . . . pero esta objeccion se dirige mas bien á la redaccion, y yo debo dirigir al fondo del asunto mis razonamientos. Todo cuanto he dicho con referencia al caso de quiebra fraudulenta y á los demas delitos, es tambien perfectamente aplicable al presente caso.

La ciudadanía, no puede perderse temporalmente por ninguna razon y por consiguiente, por el simple enjuiciamiento criminal, mucho menos. Tampoco hay justicia para que se imponga al hombre la pérdida temporal de los derechos de la ciudadanía, por no inscripcion en la Guardia Nacional.

Como el deber de inscribirse en la Guardia Nacional, es un deber político, yo creo que esta cláusula, ó este inciso, es quizá el que mas arrebataria la simpatia de la Cámara; pero fijándose con detencion, y dando por reproducidas todas las razones que he aducido sobre los demas casos, solo añadiré la siguiente sobre la no inscripcion en la Guardia Nacional. Sabido es, señor, que por la Constitucion, cumple al Congreso dictar la ley que reglamente la organizacion de las milicias. Como esta ley no se ha dictado aun, no se ha obligado á los ciudadanos por una ley especial

á inscribirse en la Guardia Nacional; y no habiéndose establecido esta obligacion no se ha establecido tampoco de antemano las penas en que incurren los que no cumplen con la ley. Todo esto falta ¿y con qué derecho vendriamos á decir que los ciudadanos que no se inscriban en la Guardia Nacional [obligacion que aun no está establecida por ley alguna] pierden por un tiempo determinado los derechos de ciudadano? Como se vé, señor, en esto no hay justicia ninguna, ni habria tampoco para hacer esto, derecho alguno en el Congreso.

Tócame ahora decir, señor, que si la Cámara encuentra que las razones que he tenido el honor de esponer á su consideracion, son bastantes para justificar la supresion que la Comision ha hecho de estos artículos en su proyecto, se persuadirá desde luego, que no ha podido guiarla ningun jénero de interés particular á este respecto. Asi es que la Comision no hace tampoco cuestion de amor propio, para que estos artículos se incluyan ó no en la ley de ciudadanía; porque no se trata de sustitucion, ni se trata tampoco de reemplazar el pensamiento del Sr. Diputado autor del proyecto, con el pensamiento de la Comision: se trata únicamente de hacer que la ley de naturalizacion se limite á lo que manda la Constitucion; que se limite á arreglar los medios de naturalizarse los extranjeros; que la ley sea mas breve, mas concisa y mas clara. Por consiguiente, la Comision creyó que estos artículos no debian formar parte de esta ley; y que aunque pudieran adoptarse algunas disposiciones de las contenidas en dichos artículos, no son necesarias en ella.

Pudiera decirse, señor, que los ciudadanos pierden tales ó cuales derechos políticos; que los dementes, no pueden elegir ni ser elegidos—esta es la suspension de un determinado derecho anexo al de la ciudadanía; pero la suspension de este derecho corresponde establecerla en la ley de elecciones, en la ley especial, donde deben consignarse los que pueden elegir y los que pueden ser elegidos; los que tienen imposibilidad absoluta para elegir, y los que tienen solamente un impedimento transitorio. Todos pertenecen á la ley especial que rija el acto de las elecciones, que regle los derechos políticos mas importantes que corresponden al ciudadano. Es cuanto tengo que decir.

Sr. Aguirre—He estado conforme con los demas miembros de la Comision respecto de todos los artículos del proyecto que se ha sancionado;

pero no he estado conforme en esta última parte, y fué en ese sentido que como miembro desidente, propuse como adiccion al proyecto algunos de los artículos presentados por el Sr. Diputado Alsina.

Las razones que acaba de espresar el señor miembro informante, ya las habia espresado en el seno de la Comision; pero ellas no habian pesado sobre mí para que yo me adhiriese á la suspension de estos derechos; ni habian pesado sobre mí tampoco para convencerme de que, si la sociedad tiene derecho de prohibir á los individuos el ejercicio de los derechos civiles, tenga tambien el derecho de privarles el ejercicio de los derechos políticos. Asi es que la adiccion que he propuesto, no importa la pérdida de los derechos de la ciudadanía, sino únicamente la suspension de los derechos políticos.

Tenga la bondad el Sr. Secretario de leer la adiccion que he propuesto. [Leyó.] Habia dicho que nunca creia que si la sociedad tenia derecho de suspender los derechos civiles, no podia dejar de tenerlo para suspender los derechos políticos. Asi es que cuando un individuo falta á las leyes comunes, cometiendo un asesinato ó un robo, á ese individuo se le condena, privándole de los derechos civiles y hasta de la vida, porque muchas veces se le condena á muerte. Por consiguiente, con mucha mas razon debe privarse á esos individuos, que faltan á las reglas comunes que rijen á la sociedad, de ejercer los derechos políticos.

Cuando un individuo se naturaliza en un país extranjero, comete un crimen contra su patria; y entonces es necesario imponerle la pena de la suspension de los derechos políticos, sin que por eso se le exima del deber de servir como ciudadano cuando regrese al país. En el caso de quiebra fraudulenta, se comete un crimen que debe castigarse civil y políticamente. Los individuos que subsistan en estado de demencia, están impedidos de ejercer los derechos civiles; se les prohíbe administrar sus bienes, y se les nombra un tutor, porque se les supone inhabilitados para ejercer esas funciones. La ley política hace otro tanto prohibiéndoles que puedan ejercer los derechos políticos.

Estas consideraciones han pesado sobre mí considerablemente para creer que no debe dejarse nunca de imponer esas penas á los individuos que cometen delitos para ante la sociedad.

Sr. Cantilo—Estaba discutiéndose la mocion

presentada por el Sr. Alsina, y los miembros de la Comision habian espresado las razones que tuvieron para no incluir en su proyecto los artículos del que presentó el Sr. Alsina. En este estado la discusion, yo propuse que se tuviera en vista la adiccion hecha por el miembro disidente de la Comision; así es que, á pesar de no haber sido presentado ese proyecto ántes, creo que la Cámara no debe dejar de considerarlo, tomando en consideracion la adiccion indicada.

Sr. Quintana—Como los artículos propuestos por el Sr. Diputado, miembro disidente, tienden únicamente á la suspension de los derechos de ciudadanía, mientras que los artículos del Sr. Diputado Alsina no solamente se refieren á la suspension, sino á la pérdida de esos derechos en determinados casos; me parece que seria bueno concretarnos al primer punto.

Sr. Alsina—El miembro informante se ha ocupado de los dos casos.

Sr. Quintana—Y ya se ha entrado en el fondo del asunto.

Sr. Presidente—Como la mocion versaba sobre si se tratarian ó no, esos puntos, se ha entrado á discusion dando las razones. . . .

Sr. Elizalde—Parece que lo que está en discusion es lo propuesto por el miembro de la Comision.

Sr. Presidente—El miembro de la Comision que ha hablado ha dado las razones por las que la Comision no ha consignado en la ley de ciudadanía. . . .

Sr. Alsina—Y nosotros queremos decir cuales son las razones que tenemos para querer lo contrario.

Sr. Presidente—Yo no me habia fijado en la proposicion del Sr. Diputado; creia que eran los mismos artículos.

Sr. Ruiz Moreno—Cuando ví, Sr. Presidente, que la mayoria de la Comision y el Sr. Ministro del Interior se oponian á que se consignara en la ley de ciudadanía los dos artículos de que se ha hablado, uno referente á las causas por que se pierde la ciudadanía y el otro á la suspension, busqué con empeño cuales serian las razones en que apoyaban su juicio; pero no las encontré, como no las he hallado aun despues del discurso del miembro informante de la Comision. Por esto voy á permitirme esponer los fundamentos de mi voto para que susistan esos dos artículos.

No daré mi voto á todas las causales que el autor del proyecto, el Sr. Alsina, señala como bastan-

tes para la pérdida de la ciudadanía y la suspension de los derechos.

Estoy en desacuerdo con algunas de ellas; pero considero indispensable que se consignent algunas de ellas con otras que llegada la oportunidad me haré el honor de proponer. El Sr. Diputado que ha explicado el juicio de la Comision ha basado toda su argumentacion en una metáfora. Ha trabajado con materiales falsos; así es que por mas que su obra aparece brillante, nada vale en el fondo: ella es falsa.

El Sr. Diputado por Corrientes principió por decirnos que así como el hijo no pierde la calidad de tal para con sus padres, el ciudadano tampoco puede perder una cualidad que se adquiere por la naturaleza.

Esta es una figura que en algo puede bien satisfacer la imaginacion; pero la razon rechaza como insostenible la proposicion sentada por el Sr. Diputado por Corrientes.

No hay exactitud en la comparacion.

La ciudadanía no se adquiere solo por la naturaleza: es decir, por haber nacido en el territorio de la Nacion; se adquiere tambien por otras causas; tales como haber residido cierto número de años, ó por haber prestado relevantes servicios al pais.

A mas, si un ciudadano, sea natural ó naturalizado, comete crímenes que le hagan indigno de ejercer los derechos que adquirió; si se ausenta del pais y se hace ciudadano de otro; seria absurdo y monstruoso considerarlo como ciudadano argentino, porque en tal caso seria hijo de dos patrias con derecho á ser protegido por las dos y con las obligaciones consiguientes: y esto no puede ser.

El hijo no pertenece por razon del padre y de la madre á dos familias; y aunque así se considere de ello no resulta mal para la sociedad; pero un ciudadano que yendo á otro pais abandona su ciudadanía primitiva por afiliarse á una nueva patria, no puede conservar los derechos que le daba la primera. A no ser así, los agentes diplomáticos de ambos paises se verian obligados á prestarles proteccion dentro de su misma patria adoptiva.

Demos por supuesto que fuese admitida la rara y singular doctrina que sostiene el Sr. Diputado por Corrientes; tendríamos entonces que un ciudadano argentino, por ejemplo, que se hubiese naturalizado en Francia, debia ser protegido y

amparado á pesar de que el Gobierno francés lo considerase su súbdito.

Hallo escusado ocupar la atencion de la II. Cámara para que note los serios inconvenientes y graves peligros que ofrece la doctrina que combató.

En todas partes, así en Francia como en España, en Inglaterra como en Norte América, la ley señala las causas porque se pierde la ciudadanía. Declara el principio jeneral, y entra luego á disponer como pueden adquirirla los hijos de otro pais y cómo la pierden ó se suspende para los que la adquirieron.

Ademas siguiendo el ejemplo ó comparacion sentada por el Sr. Diputado, sabido es que si bien un hijo no puede dejar de serlo, tambien es verdad que un hijo criminal, respecto de sus padres, puede ser abandonado y desheredado por ellos. Por otra parte; yo hallo contradiccion en el juicio de la Comision.

Ella ha consignado en el proyecto que aconseja á la Cámara, que puede ser ciudadano de la República Arjentina el que no haya nacido en su territorio, con solo residir cierto número de años ó por servicios relevantes. Y si esto aconseja en su proyecto ¿cómo no comprende que en los demas paises, habiendo las mismas disposiciones pueden ser admitidos como ciudadanos los hijos de la República?

Aquí está, pues, la contradiccion.

Si un extranjero puede naturalizarse aquí, un arjentino puede hacerlo en otro pais, y á sin perder su calidad de arjentino seria, como dije antes ciudadano de dos pueblos.

Entrando ahora, señor, á las causales que ha atacado el miembro informante de la Comision, repetiré lo que ya manifesté: que no estoy de acuerdo con algunos de ellos.

Uno de ellos es la quiebra fraudulenta, que señala el autor del proyecto entre las que causan la suspension.

La quiebra fraudulenta es un feo delito, un crimen, que por las leyes españolas que nos rijen se equipara al robo. Una ley recopilada manda tener por ladron público al quebrado que se alza. Y no habiendo rehabilitacion para los que cometen este delito, se hacen ellos indignos para siempre de ejercer los preciosos derechos de ciudadano.

La quiebra fraudulenta debe entrar, pues, en la categoria, de las causales que ocasionan la pérdida de la ciudadanía.

En la discusion en particular de cada uno de estos dos artículos, si es que son admitidos, indicaré algunas otras que juzgo poco acertadas y las que á mi juicio se han olvidado al autor del proyecto.

Antes de concluir diré dos palabras en contestacion á una parte algo patética del Sr. Diputado por Corrientes.

El ha dicho, para atacar los dos artículos, que el autor del proyecto ha querido hacer un delito de lo que es una desgracia: la locura.

Yo no sé, señor, cómo se dice esto seriamente.

Si el autor del proyecto ha incluido la locura entre las causas que puedan hacer perder la ciudadanía, es solo como la declaracion de un hecho; pero no porque quiera hacer de tan funesta desgracia un delito.

El loco que no puede ejercer ni los derechos civiles, que no puede tratar ni obligarse en lo mas mínimo ¿podrá ser hábil para ejercer los derechos y obligaciones que dá la ciudadanía?

Cuando el autor del proyecto ha señalado la locura, no ha querido decir otra cosa, sinó que los locos son incapaces de ejercer los derechos políticos; y seriamente no puede entenderse, nada parecido á lo que dijo el Sr. Diputado por Corrientes.

Se ha dicho que la materia de los dos artículos que nos ocupan, corresponde á la ley de elecciones.

A mi juicio es incuestionable que es materia de la ley de ciudadanía.

Y en efecto, la ley de ciudadanía es la que declara los derechos políticos; la ley de elecciones solo la que regla el tiempo y forma en que ha de ejercitarse uno de los derechos políticos, el sufragio: la ley de ciudadanía abraza todos los derechos políticos, hace la declaracion de que tales individuos son miembros de la Nacion con tales y cuales derechos. . . .

Sr. Montes de Oca—Eso lo declara la Constitucion.

Sr. Ruiz Moreno—Tambien declara la Constitucion que la ley de ciudadanía debe dictarse sobre la base de la ciudadanía natural; y sin embargo la ley viene á decirlo, porque es indispensable que así sea desde que es una ley reglamentaria de aquella disposicion de la carta.

Si la ley de ciudadanía es la que declara quienes son ciudadanos, lejítimamente debe declarar tambien quienes dejan de serlo.

Sr. Alsina—Es sensible, Sr. Presidente, que en un asunto de esta clase en que no hay ningún alto interés comprometido, puesto que de su resolución no depende ni la salvación ni la felicidad de la Patria; es sensible, decía, que en un asunto de esta clase se haga el abuso que ha hecho el Sr. Diputado por Corrientes de sus dotes oratorias.

Sin embargo, debe recordar á la Cámara que él empezó reconociendo que, siguiendo el ejemplo de casi todas las Naciones del mundo, yo habia consignado en mi proyecto los casos en que debe tener lugar la pérdida y suspensión de los derechos de ciudadanía. En efecto, he seguido ese ejemplo, y creo que he debido seguirlo. Cuando he visto, como tuve ocasion de decirlo en la sesion anterior, que desde el reglamento provisorio del año 17 en nuestro país, todas las constituciones y todas las leyes orgánicas, han consignado en ellos los casos en que se pierden ó se suspenden, los derechos de ciudadanía, yo debia por lo menos vacilar antes de arrojarle á una innovacion que no tiene, por cierto, fundamentos razonables en qué apoyarse.

Ademas, Sr. Presidente, iba fuera de las Repúblicas, iba á las Constituciones de las Monarquías y también encontraba allí consignados esos hechos. Iba al código francés y allí los encuentro en un artículo que dice; el francés deja de ser tal y se convierte en extranjero por tales y cuales razones. Iba á la Constitucion de la Monarquía Española y hallaba lo mismo. Pero los Señores Diputados, miembros de la Comision de Negocios Constitucionales, no se han parado ante consideracion alguna, y han creido ver mas claro que las personas competentes é ilustradas que han tenido parte en la confeccion de esos códigos, sobre todo en el francés.

El Sr. Diputado, miembro informante de la Comision, empezó diciendo que siendo la ciudadanía forzosa, esta condicion sigue al que la lleva, á todas partes y la ley no puede quitársela. Esta posición sentada de una manera absoluta, como la ha sentado el Sr. Diputado, nos lleva infaliblemente, Sr. Presidente, á esta teoría. La sociedad no tiene derecho para imponer penas. Si la ciudadanía no se puede arrebatar al hombre porque va inherente á él, porque vá pegada á su persona, por decirlo así ¿con que derecho se le puede arrancar la libertad ni la vida que, por cierto, son mas indispensables y están mas adheridos al hombre que la ciudadanía? Esa teoría, pues, bien

analizada, nos condena fatalmente á la abolicion de todas las penas, á la impunidad de los delitos por atroces que sean. El Sr. Diputado ha confundido el abandono de la ciudadanía con la pérdida ó suspension que la sociedad decreta en presencia de ciertos hechos. Aqui tratamos de esto último, no de lo primero. Fíjese la Cámara en que los artículos que propongo no conducen en manera alguna á resolver la cuestion de si el argentino puede ó no renunciar á sus derechos y deberes de ciudadano: cuestion acerca de la cual es terminante é inflexible la legislación inglesa, como lo prueba Blackstone con varios ejemplos. Segun aquella la ciudadanía no se puede renunciar: el Ingles, vaya donde vaya, no puede renunciar á sus deberes de Ingles. Esta misma doctrina si no está en la ley, está en las disposiciones de la carta de los Estados Unidos. Pero aquí, con escepcion de los casos que pongo de naturalizacion en país extranjero, se trata de cosas muy distintas.

Tratando despues en detalle el Sr. Diputado los casos en que se pierde la ciudadanía llegó á aquel en que se establece como causa bastante la sentencia que merezca pena infamante.

El Sr. Diputado en este caso recurrió al entusiasmo y al sentimiento patético, olvidándose de que era legislador; que debia traer aquí las inspiraciones de la cabeza subordinando á ellas los latidos violentos del corazon.

Yo digo, Sr. Presidente, que el individuo manchado con un crimen que merezca pena infamante ó de muerte, no debe ejercer los derechos del ciudadano; y le pregunto al Sr. Diputado; entre nosotros, por nuestras leyes, ¿cuáles son esos derechos?

Entre nosotros el ciudadano no se distingue del extranjero sino en cuanto puede ser elector y elegido; no hay mas diferencia.

Entonces yo pregunto al Sr. Diputado si él iría á las urnas electorales á votar por un individuo que hubiera sido sentenciado como asesino y si dado el caso que resultara electo tendría el coraje de sentarse á su lado en este recinto? Y le pregunto tambien, si se declara que el hombre condenado por un delito grave, puede ser elector: no se avergonzaria el Sr. Diputado si sospechaba que tenia un asunto en esta cámara por el voto de un criminal? Es preciso no confundir los derechos civiles con los derechos políticos: pasaron, felizmente aquellos tiempos de tinieblas, en que el extranjero no gozaba del ejercicio de los derechos civiles á la par que los ciudadanos: el derecho de

testar, el de enajenar y otro muchos, hoy son comunes: trátase ahora, solamente, de los derechos políticos.

Pero el Sr. Diputado ha olvidado completamente, al tratar de la suspension, tal como la considero, los casos especificados. La suspension no es una pena, es la consecuencia de un modo de ser. Yo digo al Sr. Diputado. Un hombre acusado criminalmente y que se halla en la cárcel ¿es pena porque no puede ir á votar? No Sr. Presidente, no es mas que la consecuencia inevitable y fatal de su modo de ser.

Pero llegamos Sr. Presidente al inciso sobre los dementes y hé aquí que sin sospecharlo, me encuentro proponiendo incisos ó artículos contra los pobres dementes, quiénes, felizmente, encuentran en el Sr. Diputado por Corrientes un defensor ardoroso. Pero vuelvo á repetirle al Sr. Diputado que aquí no se trata de un castigo: el estado de esos infelices los inhabilita por el ejercicio de los derechos políticos: no pueden elegir ni ser elegidos. Hasta se me han atribuido pretensiones de no sé que especie.

Sr. Presidente: Si alguna vez se trata en esta cámara de dementes, verá el Sr. Diputado que no los hostilizo, que compadezco su estado: y que aun cuando me hallo muy distante de quererles acordar el ejercicio de los derechos políticos, daré con gusto mi voto á toda idea, á todo proyecto que propenda á mejorar su desgraciado estado, dándoles buenos médicos, buenos alimentos y buenas salas en la Residencia.

Respecto del inciso sobre la Guardia Nacional, Sr. Presidente, no esperaba oír del Señor miembro informante, las razones en que ha fundado la supresion. Para él mientras el Congreso no dé la ley orgánica de Guardias Nacionales el argentino no está obligado á inscribirse en la Guardia Nacional. Yo pregunto, Sr. Presidente, si esto es sostenible; si es así como se piensa levantar entre nosotros la institucion de la guardia nacional, si es preciso, por último, que venga la ley á reglamentar el modo de inscribirse en ella, no á consignar el principio del deber, porque todos sabemos que el argentino está obligado, y rigurosamente obligado, á ser Guardia Nacional.

El Sr. Diputado concluyó con observaciones jenerales sobre sencillez que debia haber en esta ley y al efecto, la consideró solamente como ley de naturalizacion; pero esto no es exacto.

Es ley de naturalizacion y de ciudadanía, como lo declaró el miembro informante cuando lo in-

terpelé. Y yo digo; siendo ley de naturalizacion y de ciudadanía es lo mas lógico consignar los principios de la suspension y de la pérdida de ella y tan es así que creo hasta innecesario volver á traer en mi apoyo la opinion y las prácticas de todo el mundo.

Es natural y lógico, es sencillo, agregaré, para complacer al Sr. Diputado, colocar al lado del derecho adquirido, los casos en que se suspende ó se pierde ese mismo derecho.

Por ahora, Sr. Presidente he concluido.

Sr. Quintana—Como voy á hablar, Sr. Presidente, en el mismo sentido que lo acaba de hacer el Sr. Diputado dejaré la palabra para que el Señor miembro informante de la Comision cuyos argumentos acaban de ser rebatidos, los conteste, ó que lo haga cualquiera otro S. Diputado.

Sr. Torrent—Yo hablaré despues.

Sr. Quintana—Seria conveniente, sin embargo, que lo hiciera ya.

Sr. Torrent—Agradezco al Sr. Diputado su deferencia, pero yo soy el único juez del momento en que deba hablar.

Sr. Quintana—Sé perfectamente bien que cada Diputado es dueño de hablar en el momento que le parezca, pero hay tambien conveniencia en alternarse los que estén en pró ó en contra de un proyecto. Sin embargo, le haré el gusto al Sr. Diputado.

La manera como ha encarado la presente discusion el Señor miembro de la Comision, Dr. Torrent, suscita, Sr. Presidente, ó da lugar, mas bien, á dos cuestiones distintas. Primera cuestion. ¿Debe la ley de ciudadanía y de naturalizacion contener artículos ó disposiciones acerca de la pérdida y de la suspension de los derechos de ciudadanía? Segunda cuestion. ¿Tiene facultad el Congreso, y es conveniente que en algunos casos se pronuncie la pérdida ó la suspension de ese derecho? Acerca de la primera cuestion, Sr. Presidente, yo no puedo abrigar la mínima duda, como lo acaba de apuntar el Sr. Diputado que deja la palabra, como lo ha reconocido el antiguo miembro informante de la Comision, y sobre todo, como se desprende de los términos claros de esta ley.

Ella es de ciudadanía, y de naturalizacion. Sus primeros artículos son precisamente destinados á consignar quienes deben ser reputados ciudadanos argentinos, incluyendo en ellos hasta los nacidos en el territorio argentino, cosa que estaba declarada ya por la Constitucion.

Los demas artículos de la ley consagran la manera de naturalizarse los extranjeros, etc. etc.

Resulta pues, clara, neta y lógicamente demostrado, que esta ley es de ciudadanía y naturalizacion.

Ahora bien; si esta ley es de ciudadanía y de naturalizacion; si por ella sabe todo individuo de qué manera se adquiere la ciudadanía, yo pregunto ¿por qué razon esta ley no debe tambien decir á esos individuos, cuales son los derechos especiales que esa ciudadanía acuerda, de qué manera se pierden, por qué causa se suspenden?

La sencillez apetecible en todas las leyes no debe llevarnos hasta el extremo de truncarlas, suprimiendo lo que es en ellas fundamental. Y yo repito, Sr. Presidente, que tan fundamental es en la ley de ciudadanía saber cuales son los derechos que acuerda, cuando se suspende y cuando se pierde, como decir bajo qué condiciones puede adquirirse.

Así, pues, la ley de elecciones no es el lugar á propósito para establecer los casos en que la ciudadanía se pierde, los casos en que se suspende, ni cuales son tampoco los derechos políticos que ella tiene; así como la ley de elecciones no es el lugar á propósito para decir quienes son los ciudadanos, cuáles pueden optar á la ciudadanía y bajo qué condiciones.

Acerca de la segunda cuestion, puede ser subdividida en dos. ¿Tiene facultad el Congreso para pronunciar los casos de la pérdida de ciudadanía y su suspension? Es conveniente que existan algunos casos en que los derechos ciudadanos se pierdan ó que su ejercicio esté suspendido?

Acerca del primer punto, Sr. Presidente, no tengo nada que decir, porque tanto el miembro disidente de la Comision, como el que acaba de dejar la palabra, han demostrado claramente, que el Congreso tiene esa facultad.

La autoridad lejislativa que tiene, Sr. Presidente, reconocida por todos los que se sientan en este lugar, el derecho de separar un individuo de la sociedad humana, el derecho de eliminarle del número de los vivos, el derecho de acabar hasta con su propiedad, en virtud de leyes estableciendo penas, por delitos especiales, no puede carecer de la facultad de suprimir á ese individuo la calidad de argentino, de hacerle perder los derechos políticos, que la misma calidad le acuerda. De lo contrario, como ha notado muy bien el Sr. Diputado á estar al rigorismo de los argumentos espuestos por el Sr. Diputado miembro de la Comision,

ellos nos conducirán á admitir que el Congreso no puede dictar ley atacando la vida, la propiedad ó la libertad del hombre, porque estas circunstancias están tan unidas á él, como el ejercicio de los derechos políticos á la de ciudadanía. Y no se diga que la ciudadanía se recibe de la naturaleza, y que por eso no puede ser quitada al hombre, porque la vida no se recibe de los Congresos, sino de la naturaleza; y sin embargo hasta la estincion de la vida puede ser pronunciada por una ley que este Congreso dicte en uso de sus facultades.

Respecto al segundo punto, yo creo tambien que es conveniente, diré mas, que es necesario que la ley establezca los casos en que los derechos políticos se pierden, y tambien; en que no puedan ser ejercidos, por un tiempo mas ó menos largo.

Es necesario no confundir los derechos civiles con los políticos.

Todo habitante de la Nacion tiene derechos civiles, pero el ciudadano tiene ademas algunos derechos políticos de que carece el simple habitante de la Nacion. Sin embargo, señor, si hasta de los derechos civiles puede ser suspendido un individuo, estableciéndose una pena para casos dados, no puede sostenerse lógicamente que no pueda ser privado de los derechos políticos.

Todavia señor, la jurisprudencia reconoce un caso de muerte civil. Ese caso es el de un condenado á muerte, que por médio de la fuga se evade de la accion de la justicia.

El condenado á muerte en semejantes circunstancias es considerado de tal manera muerto por la sociedad, que sus propiedades han dejado de ser suyas, pasando á sus hijos y sus derechos son ejercidos por sus lejítimos sucesores, como si hubieran pasado á la eternidad.

Pregunto ahora ¿ese individuo que ha perdido hasta sus derechos de propiedad, á tal punto que es considerado como habiendo pasado á mejor vida; puede sin embargo conservar derechos políticos? De ninguna manera.

Esto por lo que hace á la cuestion en abstracto; pero como el Sr. miembro de la Comision ha descendido al exámen especial de las diversas causas propuestas por el Sr. Diputado Alsina, como de pérdida y suspension de los derechos, no de las causas de la ciudadanía, yo me hallo en el caso de seguirle en ese terreno.

La ciudadanía se pierde, primero: por naturalizacion en pais extranjero. Es necesario que la Cámara entienda bien que al decir el Sr. Diputado Alsina la ciudadanía se pierde, ha querido decir los

derechos políticos del ciudadano se pierden, por la naturalizacion del individuo en pais extranjero. Las cargas que impone la ciudadanía natural, no está en la mano del individuo renunciarlas toda vez que ese individuo nacionalizado en pais extranjero, vuelve al territorio, las cargas gravitan sobre él de la misma manera que si él no se hubiese nacionalizado en otro pais. Una cosa es perder el ejercicio de los derechos y otra cosa es sustraerse á las cargas que la ciudadanía impone.

Si un individuo puede renunciar, por un acto espontáneo, al ejercicio de los derechos, no puede exonerarse de las cargas que la naturaleza le impone. El individuo naturalizado en un pais extranjero, adquiere allí el ejercicio de los derechos políticos, y, ¿debemos nosotros contar que aceptando diversas ciudadanía, que tomando la de cada pais pueden en todos y cada uno, ejercitar los derechos políticos? ¿Qué hoy pueden ejercerlos en Francia, despues en Inglaterra, y en seguida en España, y mañana en la República Arjentina? No, por cierto.

El segundo inciso dice: por la aceptacion de empleos de otros Gobiernos, sin permiso prévio del Congreso.

Este inciso tiene que ser combinado con el artículo que anteriormente ha sancionado la Cámara, la aceptacion de empleos incompatibles con la calidad de ciudadano.

Si un individuo gozase de la plena libertad de aceptar por todas partes fuera de su patria, empleos incompatibles con los deberes que la ciudadanía natural le impone, resultaría, Sr. Presidente, que ese individuo se habria puesto en contradiccion consigo mismo. El empleo aceptado en pais extranjero, incompatible con su carácter de ciudadano arjentino, le impondria el deber de obrar en tal ó cual sentido, en contradiccion con los deberes que como ciudadano del pais de su nacimiento está obligado á desempeñar.

Sobre todo, al individuo que quiera aceptar un empleo de ese jénero, el mismo artículo de la Constitucion le abre el camino para poderlo verificar, puesto que puede pedir permiso al Congreso de su pais. Desde que quiera ejercer los derechos debe sujetarse á las condiciones que la ley le imponga. Si ese individuo desconoce las autoridades de su pais, es claro que no quiere sujetarse á las meras formalidades de venir á pedir licencia para aceptar un empleo.

Ese individuo que tampoco ha dado pruebas de amor á su pais, no debe venir á gozar en él de

todos los derechos políticos que la Constitucion acuerda, y que la naturaleza consagra, á la par de los ciudadanos que cumplen con su deber y contribuyen con ello á la prosperidad de su pais.

Otro inciso dice: por sentencia condenatoria en virtud de delito que merezca pena infamante ó de muerte. El mismo Sr. Diputado miembro de la Comision ha reconocido que es ciertamente doloroso que la fuerza de las cosas nos obligue á tener que bajar la frente ante una tan grave falta, de parte de un compatriota; pero si no podemos, señor, borrar de su frente la calidad de ciudadano, cuando menos, señor, inhabilitándole para el ejercicio de los derechos políticos del ciudadano, que sobre él queden pesando todas las cargas.

La primera condicion de un buen ciudadano para el ejercicio de los derechos políticos, es la virtud, y un individuo, un ciudadano que ha llegado al caso estremo de manchar sus manos con sangre, ese individuo no tiene derecho á contribuir á dar leyes al pueblo, no tiene derecho á tomar parte en la cosa pública ni mucho menos á ejercer cualquier empleo.

Si suponemos el absurdo que un ciudadano que haya merecido una sentencia del jénero de la que hablamos, pudiera ser llevado á las bancas de la Lejislatura, yo creo que ninguno de nosotros podia continuar en su lugar, ni alternar con él. Ese individuo no puede elejir ni ser elejido. Además de la conciencia pública, además del buen sentido público, la ley debe inhibirle de hacer parte de una asociacion política, cuya base debe ser la moral y la virtud.

Ha pasado en seguida el Sr. Diputado miembro de la Comision á los casos de suspension de los derechos del ciudadano.

El primer argumento que hizo, fué decir que acabándose de demostrar que el Congreso no tenia la facultad de pronunciar la estincion de los derechos del ciudadano, tampoco podia suspenderlos. Este argumento en si mismo era muy malo, muy falto de lójica. De la falta de poder para lo mas, no podia deducirse la falta de poder para lo menos.

El argumento lójico es precisamente al revés.

Pero, señor, si los tres Diputados que acabamos de hablar hemos demostrado de una manera clara y satisfactoria que el Congreso tiene la facultad plena para ordenar la pérdida de los derechos del ciudadano, tenemos que concluir forzosamente que el Congreso tiene la facultad de suspender el ejercicio de esos derechos.

Ahora descendiendo á los casos para los cuales nos propone el Sr. Diputado Alsina la suspension, el primero es por el estado de quiebra, desde el momento que sea clasificada de fraudulenta.

A mi juicio, Sr. Presidente, el Sr. Diputado por Entre Rios ha hecho notar con mucha exactitud que este caso no debe ser de suspension, sino de pérdida de los derechos de ciudadanía. La quiebra declarada fraudulenta, es un delito que por las leyes vijentes sancionadas por este Congreso, tiene penas verdaderamente intamantes, como no puede menos de tenerla. Asi, no solamente estoy de acuerdo en que debe ser un caso de suspension, sinó un caso de pérdida de los derechos; segundo, por demencia.

Solo, señor, por el deseo de hallar argumentos para refutar lo que en sí mismo es irrefutable, ha podido el Sr. Diputado por Corrientes, mirar esta como una pena.

Yo, señor, no haré un discurso, ni sería capaz de hacerlo, tan poético como el que ha hecho sobre este punto el Sr. Diputado; pero creo que en el fondo no compadecerá mas á los individuos á quienes diversas causas han podido traer á tan lamentable estado.

La suspension que en este caso se pronuncia por el Congreso, no importa una pena por esa desgracia; importa simplemente la declaracion de la inhabilidad para ejercitar los derechos políticos, durante tan lamentable estado. Esa noche de la intelijencia que se llama la locura inhabilita para el ejercicio de los derechos civiles. ¿Cómo puede entónces dejar la capacidad necesaria para el ejercicio de los derechos políticos? ¿Acaso las leyes civiles han querido imponer una pena á esa espantosa desgracia cuando han dicho que los que la experimentan no pueden heredar, etc. etc?

No, Sr. Presidente, por el contrario han entrado en los intereses mismos del individuo cuando le han privado de ejercitar esos derechos que les puede llevar á cometer toda clase de desaciertos, proveyéndole al mismo tiempo de un tutor que pueda atender á su persona misma.

El lejislador civil no solamente no ha pronunciado la pena al prohibir al loco el ejercicio de sus derechos civiles, sino que ha estendido su mano previsora impidiendo que caiga en la indijencia, haciendo que puedan conservarse sus bienes ó intereses, que talvez puedan traerles de nuevo á la razon.

La capacidad mental, Sr. Presidente, es la primera condicion para la celebracion de cualquier

acto que pueda traer obligaciones, que pueda comprometer los intereses particulares, y debe serlo tambien, por consiguiente, para cualquier acto que pueda comprometer los intereses públicos. Si el loco está inhibido por las leyes jenerales de enajenar la mas pequeña parte de su patrimonio ¿cómo puede, Sr. Presidente, comprometer los intereses públicos pudiendo ser elegido, ó elegir? La consecuencia lójica de su estado es la suspension de sus derechos políticos, durante tan dolorosa situacion.

El Sr. Diputado por Corrientes ha dicho que es un exagerado rigor [si estas no fueron sus palabras al menos es su idea] suspender el ejercicio de los derechos políticos á un individuo que está sometido á un juicio criminal, del que puede resultar inocente. Pero, señor, sobre el individuo sujeto á un proceso criminal pesa ya una prevencion de delincuente, y por consiguiente no hay rigor exagerado en la ley en suspenderle del ejercicio de sus derechos políticos. Si este individuo resulta inocente, si es absuelto, entra nuevamente á ejercer sus derechos.

Pero hay mas, hay algo que el Sr. Diputado no ha debido olvidar. Nadie puede ser sujeto á un proceso criminal, ni á prision, mientras contra él no obre algo que importe una semi-plena prueba de su culpabilidad. Ningun poder político ni judicial, tiene por la ley el derecho ó facultad de reducir á prision á un individuo cualquiera, mientras no haya levantado un sumario, en cuya virtud su culpabilidad aparezca cuando menos indiciada, es decir que sobre ese individuo pese una presuncion de delincuente; y por consiguiente, la ley debe inmediatamente inhabilitarle para el ejercicio de sus derechos políticos.

El último caso es por no inscripcion en la Guardia Nacional. Es exacto que el Congreso no ha dictado la ley reglamentaria de la milicia; pero es tambien exacto que la inscripcion es obligatoria en virtud de las leyes vijentes en toda la República. Esas leyes obligan á todos los ciudadanos arjentinos que están obligados á inscribirse en el lugar donde tienen su domicilio. Si este es un deber; si todo derecho es inherente á las obligaciones, si un individuo cualquiera falta á los deberes de ciudadano no inscribiéndose en la Guardia Nacional ¿cómo pretende ejercer los derechos que son correlativos de ese deber? La ciudadanía tiene dos faxes; una de obligaciones, otra de derechos. El que falta al cumplimiento de sus obligaciones, no tiene el derecho de pedir

el ejercicio de esa facultad. El que se niega por su parte á prestar el contingente de sangre para el servicio de su patria; el que falta á la inscripcion de la Guardia Nacional ¿cómo puede pretender ser elegido para los puestos públicos que solamente se pueden desempeñar en el ejercicio de los derechos de ciudadanía? He dicho, señor.

Sr. Ministro del Interior—Este debate parece que ha tomado proporciones mayores que las que podian esperarse al iniciarse, y las formas académicas, por decirlo así, á que ha venido á reducirse, lo hacen muy interesante sin duda, pero no le hacen adelantar un paso mas en el camino de la solucion definitiva. Por mi parte desearia que esta sancion tuviera un pronto término y por eso me limitaré á decir muy pocas palabras en la cuestion.

La cuestion reducida á términos precisos es esta: ¿la ciudadanía se puede perder ó nó, se puede suspender ó no? Las dudas y las diferencias de opinion nacen principalmente de las nociones que se tienen de lo que constituye la ciudadanía. Por el lado de los derechos que ella confiere, se comprende que se puede adquirir, perder ó suspender, en casos dados. Los que la miran por el lado de las cargas piensan que nunca conviene suspenderla. Otros la miran como el resultado del pacto social en virtud del cual un individuo se liga al cuerpo político bajo las condiciones que la ley fija, que recibe ciertos derechos á condicion de ejercitar ciertos servicios; de soportar ciertas cargas. Ese pacto así concebido es lo que dá la noción mas clara de lo que constituye la ciudadanía y entiendo que toda vez que se prive al ciudadano de los derechos que en virtud de este pacto tiene adquiridos, es por lo menos equitativo que se le exonere de las cargas que en virtud de esos derechos le están impuestas. Miradas las cosas bajo este punto de vista, á mi me ha parecido, y ha sido constantemente mi persuasion, que la ciudadanía no se puede arrebatar una vez adquirida, que nadie la puede quitar ni ser suspendida.

Para probar palpablemente mi modo de sentir, tomaré las nociones mismas que el proyecto del Sr. Diputado consigna para los casos en que pueda perderse ú suspenderse, y comenzando como lo hizo el Sr. Diputado por Corrientes por los casos en que pueda perderse la ciudadanía, diré: La ciudadanía se pierde por el hecho de admitir empleos públicos en otros países. Y bien, señor, es una cosa que ocurre frecuentemente. Precisa-

mente ha tenido lugar hace pocos dias con motivo de la protesta elevada por dos ministros extranjeros respecto á esta ley. Que un frances ó hijo de frances nacido en Buenos Aires ó en un punto cualquiera de la República, para la Francia es frances, para la República Argentina es argentino. Yo me imagino que este frances viniera á Montevideo, como decia el Sr. Mármol, se inscribe allí, como ciudadano frances y vuelve al pais de su nacimiento. ¿Qué es este hombre? es frances porque la ley de la Francia lo declara tal, porque lo sigue para ampararlo donde quiera que esté; es frances porque se ha inscripto en el registro de aquella Nacion; es frances porque la ley que se está discutiendo lo exonera de la calidad de argentino, por el hecho de haber aceptado un empleo extranjero. Un ciudadano argentino vuelve, pues, con el carácter de extranjero y así como no tiene derechos para ejercitar actos que emanan del derecho de la ciudadanía argentina, así tampoco la sociedad tiene el de imponerle las cargas. De otro modo resultaria una cosa insostenible. Un individuo que tiene patria para soportar las cargas, no la tiene para ejercitar derechos.

Se ve, pues, que por este lado muy claro y perceptible, la pérdida de ciudadanía, en el sentido genuino y directo, es incompatible con los deberes que el ciudadano tiene.

Por otra parte, la aceptacion de empleos, es una cosa muy insignificante. Los argentinos que han emigrado en época anterior han tenido que aceptar empleos y de mucha trascendencia, y á nadie se le ha ocurrido hacerles de ello un crimen. Si se aceptára, Sr. Presidente, la doctrina de los señores Diputados, resultaria que en tiempos difíciles y en momentos en que el carácter de ciudadano impone grandes deberes, que comprometen las personas y las vidas, seria un camino muy cómodo el de aceptar cualquier puesto en el extranjero, á fin de ser exonerado de las cargas que sobre los ciudadanos pesan.

Creo que la ley puede ser tan rigorosa como se quiera en cuanto á la adquisicion de los derechos, pero que en cuanto á los deberes y derechos no pueden perderse ni suspenderse jamas.

Esta es la opinion que he manifestado en el seno de la Comision. Por lo demas si esta ley se limitara, no á las reglas para las pérdidas y la suspension de ciudadanía, sino que dijera tales condiciones del ciudadano lo inhabilitan para el ejercicio de tales ó cuales derechos, seria tal vez aceptable, porque en alguna parte seria preciso

consignarlas. Asi como en la ley de elecciones puede decirse: no pueden ser electores ni elegibles, los que estan colocados en tales y cuales condiciones, en esta ley podia decirse: no pueden ejercer tales derechos de ciudadanía, los que estén en tales ó cuales condiciones.

Pero la pérdida de la ciudadanía repito, y repetiré siempre que no debemos consignarla, porque es contraria á nuestras instituciones.

En cuanto al derecho de ciudadanía, he nombrado el derecho de ser elegido, pero no es el único. Tambien hay diversas maneras de ver lo que son derechos y deberes. ¿El derecho de elegir es un derecho ó un deber? Es cuestion que no está resuelta satisfactoriamente. Es un derecho perfecto del ciudadano, pero es tambien un deber impuesto. ¿El derecho de llevar las armas en defensa del pais, es un derecho ó es un deber? es una y otra cosa. Es un deber el soportar esa carga. Es un derecho porque en todo pueblo libre y de instituciones como el nuestro, el ciudadano tiene el derecho de armarse para su propia y ajena defensa, para defender su pais de las invasiones extranjeras, y aun para defenderse de las posibles tiranías que puedan levantarse en él. Hé ahi como la ley no puede distinguir lo que son derechos de ciudadanía, de los que son deberes, puesto que tanto uno como otro son inherentes al ciudadano.

Por eso he dicho que al tratar de la ley de elecciones se puede decir: no pueden ser elegidos en tales y cuales condiciones, y lo mismo digo relativamente á la ley de ciudadanía.

Por estas consideraciones y deseando que la ley pase con la mayor rapidez posible, por el tiempo que ya ha transcurrido, me limito á lo que he dicho y no agregaré una palabra mas.

Sr. Presidente—Se va á votar si el punto está suficientemente discutido ó no.

[Se votó y resultó afirmativa jeneral.]

Entiendo que lo que tiene que decidirse por una votacion es si se ha de discutir y votar especialmente los artículos propuestos.

Sr. Elizalde—Eso ya está resuelto por la Cámara; lo que hay que votar es si se admiten ó no los artículos que se han propuesto.

Sr. Torrent—Debe votarse si se admiten en jeneral los artículos.

Sr. Presidente—Bien, se vá á votar si se da-

miten en general los artículos propuestos.

Se votó y resultó negativa de 20 votos contra 15. En seguida se votaron los artículos octavo y noveno del proyecto de la Comision, y fueron aprobados sucesivamente sin observacion alguna, quedando sancionado así:

El Senado y Cámara de Diputados etc.

Art. 1º Son ciudadanos argentinos:

1º Los que hayan nacido y nacieren en cualquier punto del territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

2º Los hijos de padre ó madre argentinos que habiendo nacido en pais extranjero manifiesten al juez nacional ó provincial del distrito en que se hallen, su intencion de ser ciudadanos.

Art. 2º Son ciudadanos por naturalizacion:

1º Todos los extranjeros que habiendo residido dos años continuos en territorios argentinos y cumplido veinte años de edad obtengan carta de ciudadanía.

2º Los extranjeros que obtengan carta de ciudadanía alegando y probando servicios á la nacion ó á alguna de las Provincias que la componen.

Art. 3º Los hijos de ciudadanos nativos nacidos en el extranjero, que manifiesten su voluntad de ser ciudadanos, deberán probar legalmente ante el juez nacional ó provincial respectivo su calidad de hijos de padre ó madre argentinos, y hacer la formal promesa de no obedecer á otras autoridades y leyes que á las de la República.

Art. 4º Dichos jueces ante quienes se hiciere la manifestacion de que habla el inciso 2º del art. 1º, harán constar en un registro especial el nombre, edad y lugar del nacimiento del interesado, debiendo remitir cada trimestre al ministerio del Interior un estado de las inscripciones que se hubieren hecho ante sus respectivos juzgados.

Art. 5º Los extranjeros para ser naturalizados deberán probar ante el juez nacional del distrito en que se hallen, que han residido los dos años que exige el art. 20 de la Constitucion, y han cumplido la edad de 20 años ó que han presentado servicios á la patria, declarando al mismo tiempo que no obedecerán á otras autoridades y leyes que á las de la República.

Art. 6º Los jueces nacionales en las Provincias y el Presidente de la República en la Capital, podrán acortar el término de dos años de la residencia en favor de los extranjeros que soliciten ser naturalizados, previas las formalidades

prescriptas en el artículo anterior, probando legalmente ante ellos que han desempeñado con honradez un empleo de la República dentro ó fuera de ella en la administracion nacional ó Provincial, ó que se hallare en actual servicio, en el Ejército ó en la Escuadra ó que han asistido á una funcion de guerra en defensa de la independencia, de la libertad ó de la forma republicana de gobierno, ó que han establecido en el pais una nueva industria ó introducido una invencion útil.

Art. 7º No podrán ser naturalizados:

1º Los súbditos de un Estado que esté en guerra con la República mientras dure la guerra.

2º Los que pretendan conservar la ciudadanía de otro pais.

3º Los que quieran retener empleos dados

por Gobiernos extranjeros, con escepcion de los consulares ú otros cuyo ejercicio sea compatible con las obligaciones del ciudadano.

4º Los quebrados fraudulentos.

5º Los que tengan sobre si sentencia condenatoria que imponga pena infamante ó de muerte.

6º Los vagos y los que no tengan medios honestos de vivir.

Art. 8º Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones que se hallen en contradiccion con la presente ley.

Art. 9º Comuníquese al P. E.

Se levantó la sesion á las 4 de la tarde.

